

El nuevo gobierno uruguayo: ¿Hacia dónde va la izquierda oriental?

Por Nelson Fernández

DOCUMENTOS

Las expectativas que se abren entre los uruguayos, son diferentes. Por un lado, una masa de votantes históricos de izquierda (incluyendo los activistas o dirigentes de tercera línea) tienen expectativas de que el cambio sea significativo, radical. Que se traduzca en un corte histórico con lo que hicieron colorados y blancos. Por otro lado, un sector de gente que no votó a la izquierda, que estaría conformado por empresarios, ejecutivos de compañías e inversores financieros, tienen expectativas de que el nuevo gobierno, apoyado en el aggiornado ministro de Economía, Danilo Astori, mantenga una continuidad de las líneas fundamentales de gobiernos anteriores y que mejore algunos aspectos en la conducción del Estado. Es decir, una especie de continuidad mejorada.

Nelson Fernández Salvidio es periodista y autor del libro *Quién es quién en el gobierno de la izquierda* (diciembre 2004, Editorial Fin de Siglo). Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Noticieros de Canal 10 (Montevideo), es corresponsal en Uruguay del diario "La Nación" de Buenos Aires y columnista de Política-Economía de Radio Sarandí 690am. Es docente de Periodismo Escrito en la Universidad Católica del Uruguay. Preside el Capítulo Uruguayo de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF). Fue subsecretario de Redacción de la revista "Búsqueda" hasta febrero del 2004. Es Investigador Asociado de CADAL.



¿Adónde va el gobierno de la izquierda? Es la pregunta que muchos uruguayos se hacen luego que el país haya dado un fuerte giro político tras el ciclo electoral que acaba de concluir con las municipales.

Supuestamente no debería haber dudas sobre la orientación política del gobierno. Los partidos presentan un programa de gobierno en la campaña electoral, sus dirigentes hacen discursos, leen proclamas, dan entrevistas a los medios de prensa, y el público antes de las elecciones ya debería tener claro cuáles serán los ejes de un gobierno elegido en las urnas. Más aún, cuando ese gobierno cuenta con una mayoría en las cámaras legislativas y no tiene que recurrir a tejer una alianza política post electoral para asegurarse gobernabilidad, lo que supone que deba ceder algunos aspectos de su plataforma.

Pero el cambio surgido en las elecciones de octubre del 2004 no es una simple rotación de partidos en el poder. Durante casi 175 años el país estuvo gobernado por dirigentes de los partidos tradicionales, Colorado o Blanco, con algunas interrupciones por golpes de Estado, aunque también en esas ocasiones los gobernantes de facto tenían algún tipo de afinidad con esas fuerzas políticas. No hubo dictaduras con dirigentes de izquierda.

La coalición de izquierda (cuyo nombre formal es “Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría”, que vamos a mencionar por su nombre tradicional porque esa es su esencia política) prometió “el cambio”, tanto en su programa como en su discurso. Pero lo que alimenta los interrogantes sobre cómo será el nuevo ecosistema político que vivirá el Uruguay, es que ese “cambio” prometido por la izquierda durante décadas, también ha ido cambiando, fundamentalmente en los últimos años.

Y como cambió el cambio, las expectativas que se abren entre los uruguayos, son diferentes. Por un lado, una masa de votantes históricos de izquierda (incluyendo los activistas o dirigentes de tercera línea) tienen expectativas de que el cambio sea significativo, radical. Que se traduzca en un corte histórico con lo que hicieron colorados y blancos. Por otro lado, un sector de gente que no votó a la izquierda, que estaría conformado por empresarios, ejecutivos de compañías e inversores financieros, tienen expectativas de que el nuevo gobierno, apoyado en el aggiornado ministro de Economía, Danilo Astori, mantenga una continuidad de las líneas fundamentales de gobiernos anteriores y que mejore algunos aspectos en la conducción del Estado. Es decir, una especie de continuidad mejorada.

Las expectativas

Obviamente, las expectativas tienen un arco de matices mucho más amplio. Pero esos dos tipos de expectativas resumen, lo más ajustado posible, lo que la sociedad espera del gobierno de izquierda.

No hay gente que espere que el presidente Tabaré Vázquez encare un proceso de transformación socialista en su período. Y no es que eso no esté en el horizonte político de muchos dirigentes del Frente Amplio. Es más, algunos sectores como el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista y el Partido Comunista, tienen planteado –con matices- una definición política en sus documentos públicos de caminar hacia un sistema de socialismo. Pero no en este período. Y saben que Vázquez no va en ese camino. O sea, que entre las expectativas sobre el destino político del actual gobierno, no figura un planteo tan radical de ese tipo.

Por lo tanto, se descuenta que el gobierno de izquierda va a mantener las cuestiones básicas mínimas de un sistema económico capitalista, pero igualmente podemos dividir las expectativas en dos categorías:

Los que esperan un cambio fuerte y visible, aguardan por lo siguiente:

- expansión del Estado en algunas actividades económicas;
- mantenimiento de monopolios estatales o ampliación en algún caso;
- controles estrictos a las empresas privadas con imposiciones de que éstas distribuyan sus ganancias entre trabajadores y consumidores;
- intervención del Estado para impedir que “el mercado decida por sí mismo” en temas como comercio exterior, mercado cambiario, precios de bienes y servicios;
- inclinación de la balanza en negociaciones entre partes vinculadas a contratos privados, para “beneficiar” a los “más débiles”, como por ejemplo favorecer a deudores en su relación con los bancos, a trabajadores frente a sus empleadores, etcétera;
- que genere mediante decisiones políticas, una variación significativa de la distribución del ingreso, con:
- realineamiento internacional, con mejoras en relaciones con los gobiernos desafiantes a los Estados Unidos;
- todo esto, en medio de un revisionismo del pasado, sea de medidas políticas como también de personas, con “persecución” a gobernantes anteriores y fundamentalmente a figuras emblemáticas de la represión contra la izquierda en los años setenta y ochenta.

Los que cruzan los dedos para que haya una continuidad, esperan fundamentalmente a que se cumplan estos requisitos:

- respeto a las bases de un sistema capitalista;
- impulso al sector privado;
- profundizar algunas reformas estructurales iniciadas por gobiernos anteriores o que quedaron pendientes de concretar;

- que se despeje la incertidumbre, mediante negociaciones con los organismos multilaterales de crédito, sin provocar “ruido político” en el mercado financiero;
- equidistancia de las partes en su papel de mediador, y si es posible que respalde a las empresas con garantías de su propiedad privada frente a exigencias de trabajadores;
- respeto a los contratos privados;
- que respete la separación de poderes;
- que se baje el peso del Estado, o sea que se reduzca la presión impositiva sobre el sector privado;
- que se brinde previsibilidad económico-financiera para el ámbito de los negocios;
- que no haya una “política de choque” contra partidos tradicionales o gobernantes anteriores, es decir que haya un clima político de convivencia pacífica y que no se genere mediante “discusiones calientes” un “ruido político” en la economía.

Y ante expectativas diferentes, ¿qué hará el nuevo gobierno? Para responder esa pregunta, que por supuesto no es nada sencilla ni lineal, es necesario ver cuál es el escenario político en el que se desarrolla la acción de la administración Vázquez y cuáles han sido las señales que se emitieron en los primeros cuatro meses de gestión.

El marco político y la oposición

La izquierda ganó la elección con más del 50% de los votos por lo que no precisó la segunda vuelta prevista en el régimen electoral y se aseguró mayoría propia en ambas cámaras legislativas. El ciclo electoral se completó con las elecciones municipales del 8 de mayo de 2005, cuando la izquierda no sólo consolidó una imagen ganadora sino que superó sus propias estimaciones más optimistas, al lograr el gobierno departamental de 8 de los 19 municipios. Eso significa no sólo que afirmó una mayoría amplísima en la capital del país y que llegó a gobernar Canelones (el segundo departamento), sino que ganó la confianza del electorado para manejar las intendencias de Maldonado, Paysandú, Salto, Florida, Rocha y Treinta y Tres.

La oposición quedó aplastada por el triunfo del Frente Amplio. El Partido Colorado viene de su peor derrota electoral en octubre de 2004, y aunque se dio el gusto en mayo de mostrar que puede recuperarse con renovación de dirigentes, ha quedado con poco margen de acción política: una bancada parlamentaria reducida y la administración de un solo municipio (muy al norte, lejos de la repercusión política capital).

El Partido Nacional fue el gran derrotado en mayo: perdió intendencias que nunca imaginó dejar a la izquierda; actuó dividido (una enfermedad política que mucho daño le ha hecho a los blancos históricamente) y quedó sin liderazgo de conducción. La imagen de Jorge Larrañaga se deterioró

en el manejo político de la negociación para integrar los directorios de entes y con la derrota en departamentos claves para las municipales. Aunque evitaron pasarle una factura tras los comicios, es claro que su partido no lo reconoce como líder. El ex presidente Luis Alberto Lacalle quedó con poco movimiento político y hasta dentro del Herrerismo – su sector- han tratado de tenerlo al margen. Francisco Gallinal conduce un sector que también salió golpeado de las elecciones, porque una de sus fortalezas estaba en intendencias del interior y la derrota de Enrique Antía en Maldonado y Andrés Arocena en Florida afectaron al grupo. Blancos y colorados fueron sacados de sus puestos del Estado por el voto popular. Ese mensaje fue claro no sólo en octubre sino en mayo. Y eso pone un freno a la acción opositora, porque los dirigentes de partidos tradicionales tienen que controlar al gobierno, pero dejarlo hacer. El electorado, que ha dado un giro a la izquierda, no les perdonaría que obstaculizaran el “cambio” que se avaló en las urnas.

Pero fundamentalmente, los propios blancos y colorados son concientes que si es cierto que el ejercicio del gobierno desgasta, lo que tienen que hacer es dejar gobernar a la izquierda para luego cobrarle facturas sobre la continuidad de políticas que antes censuraron o sobre la supuesta frustración de no satisfacer expectativas populares de mejora sustancial de la calidad de vida.

La interna de la izquierda

Pero que la izquierda haya quedado como la fuerza política central del sistema uruguayo no significa que no tenga problemas. El presidente Vázquez tiene que manejarse con sutileza sobre una estructura que tiene una base amplia pero diversa. La coalición es la suma de sectores que piensan diferente tanto sobre el proyecto político final, como respecto al mejor camino para llegar a ese destino.

Vázquez incluyó en su gabinete de ministros a los principales dirigentes de cada sector político de la izquierda. Pero básicamente los dos polos se representan en la gestión del ministro de Economía, Danilo Astori y la del ministro de Ganadería José Mujica.

Vázquez hace equilibrio, pero es obvio que respalda a Astori, lo que no significa que no deje espacio a Mujica y su gente para que reclame e incida. Pero Astori por un lado y Mujica por el otro, simbolizan mucho más que criterios diferentes de tipo personal o la batalla entre dos grupos. Son las cabezas visibles de dos formas de querer ejercer el gobierno en la izquierda y debajo de ellos hay estructuras políticas que no es fácil de establecer. No es Asamblea Uruguay de Astori contra el MPP (o el MLN-T) de Mujica. Es mucho más que eso.

O sea que la interrogante del título (¿A dónde va el gobierno de la izquierda?) tiene respuestas diferentes según a quién se le planteó al interior de la fuerza política en el gobierno.

Es por eso que a todos les interesa saber cuál es la respuesta del propio Vázquez y cuál es la fuerza que tiene para imponer sus decisiones sin romper la unidad interna.

¿Hacia dónde va?

En confianza, muchos miembros del gobierno dicen (unos lo responden directamente y otros lo sugieren) que la respuesta oficial es que se inclina a satisfacer más las expectativas planteadas en segundo término (aquellas de mantener seguridad jurídica para generar un clima favorable a los negocios, que permita crear fuentes de empleo, aumentar la producción y el consumo interno y mejorar la calidad de vida de las familias). Eso, sin que los votantes de la izquierda se sientan defraudados de la gestión. ¿Y cómo se logra? Vázquez confía en su capacidad de persuadir para explicar que ese es el camino. Confía en que le tendrán paciencia con los reclamos sectoriales. Confía en poder explicar que “la herencia político-económica” no da margen para que el Estado solucione todos los problemas.

Habría que ver cómo actuó el gobierno en lo que va de su gestión respecto a determinados asuntos de importancia política:

- Sobre la reforma constitucional de los servicios de agua, busca mantener las concesiones otorgadas a privados, pero no flexibiliza el contrato de la firma Uragua que ya estaba en conflicto sobre las condiciones del mismo. No aplicó una estatización a rajatabla.
- En telecomunicaciones mantuvo las concesiones a bandas de celulares y rechazó el reclamo monopolista del sindicato de Antel.
- Defendió la instalación de plantas de celulosa contra el alegato de dirigentes frentistas, organizaciones ambientalistas y también contra el gusto político de las autoridades del gobierno “amigo” de Néstor Kirchner.
- Sobre las administradoras de fondos previsionales se confirmó que se mantendrán, pese a que los sindicatos y el presidente del BPS quieren borrarlas del mapa.
- Sobre el Tratado de inversiones con Estados Unidos, que tanto disgusta al canciller Reinaldo Gargano y otros dirigentes, el vicepresidente Nin Novoa anunció a funcionarios de Bush, que será aprobado en el Parlamento.
- Sobre ejecuciones por deudas, no se permitió una ley para suspenderlas y frente a la presión de productores endeudados (e incluso una carpa frente al Parlamento), todo se limitó a una lista de sugerencias para que aplique la banca.
- Sobre los pedidos de bajas de precios, todo quedó en un acuerdo del ministro José Mujica (MGAP) con frigoríficos y carnicerías para vender un tipo de asado de baja calidad a un precio de oferta.
- Sobre política económica, los primeros pasos fueron para firmar un acuerdo crediticio con el FMI en el

que se asegura un superávit fiscal primario para poder pagar en tiempo y forma con los intereses de deuda. En lugar de manejar posibles acuerdos regionales para no pagar la deuda -como le reclamaban sectores radicales de la izquierda y dirigentes sindicales- el gobierno celebró en dos conferencias de prensa las dos ocasiones de exitosa colocación de nuevos bonos por U\$S 500 millones.

- Sobre gasto público, todos los discursos y documentos hacen pensar en que no habrá ni “salariazos públicos” ni uso de una política fiscal expansiva. El encuentro de ministros con Vázquez en la Estancia de Anchorena giró mucho sobre las restricciones presupuestales.
- Y el dólar sigue “barato”, lo que favorece la competencia de productos importados en la oferta total de bienes (¿una medida de izquierda?).

No significa esto que la izquierda esté cumpliendo determinados deberes con “el sistema”. Es una enumeración de hechos en los que -más allá de algunas “idas y vueltas”- la resolución se inclina más hacia las expectativas de los que esperan cierta continuidad de política económica que hacia los que reclaman “el cambio”.

Algunas señales confusas

Es cierto que se han dado algunas señales que para empresarios e inversores son preocupantes. Se pueden citar algunos ejemplos:

- el decreto sobre ocupaciones sindicales de empresas (que reconoce ese derecho a los trabajadores como medida de fuerza);
- la intervención del Ministerio de Trabajo en el conflicto (curioso) de Gaseba para reintegrar a despedidos hace 10 años (lo que más llamó la atención fue la forma en que el MTSS tomó partido por los sindicalistas y algunos dichos de autoridades de esa secretaría);
- la convocatoria a consejos de salarios (el mercado laboral es muy diferente al de 1985-9 para volver a esto y el temor viene por la posibilidad de paros y conflictos como presión de los gremios a los patrones).

Pero también es claro que un gobierno de izquierda tiene que dar ciertas señales a su electorado y a sus recolectores de votos (sean dirigentes de base o sindicalistas), aun cuando eso vaya en contra de algunas banderas levantadas. Para el gobierno de la izquierda, crear un buen clima de negocios no significa dejar a los empleadores que hagan lo que quieran con su personal. Y el ministerio de Trabajo está orientado por dirigentes del Movimiento Tupamaro. Eso no implica que no se hayan aceptado pautas de ajuste salarial acotadas (de 2% a 4% de aumento por encima de la inflación en todo un año).

Iniciativa política

Desde que asumió en marzo, el gobierno de la izquierda no sólo ha tenido el protagonismo político como era esperable, sino que ha generado una gran cantidad de hechos públicos, quizás demasiados. Pero eso, también es parte del equilibrio para satisfacer expectativas de sus votantes y de los que no lo votaron.

Entre tantos actos y anuncios, el 19 de mayo pasado se lanzó la propuesta de un “compromiso nacional”, que una semana antes comunicó el ministro Danilo Astori en un foro empresarial.

Las líneas del documento expuesto por los ministerios de Economía y de Trabajo, se acercan mucho más a las expectativas que pueden tener los empresarios que las que pueden tener los sindicalistas. Es difícil saber cuál será la suerte de esa iniciativa. Pero no es menor la decisión de Vázquez de poner al frente de la propuesta de ese acuerdo a los dos ministerios que representan los polos extremos de la izquierda: el de Astori, que es la punta de la corriente moderada y aggiornada a un capitalismo moderno; y el de los tupamaros, que mantienen la bandera de un proyecto socialista a largo plazo.

Según el documento puesto a consideración por el gobierno, la administración Vázquez va hacia un modelo capitalista con políticas del Estado para ayudar a los sectores pobres. El gobierno dice que “el estímulo a la inversión es uno de los ejes centrales de la estrategia de desarrollo encarada por el gobierno” y que “la coordinación de esfuerzos entre el gobierno y los actores sociales del sector privado es determinante para promover la inversión, al generar un clima adecuado para el desarrollo de los negocios”.

Como “prioridades del gobierno para el cumplimiento de este objetivo” menciona cinco puntos:

- “(i) la preservación de los derechos de propiedad, protegiendo los derechos de deudores y acreedores a través del cumplimiento de los contratos,
- (ii) el desarrollo del mercado de capitales,
- (iii) el fortalecimiento del marco para la reestructuración de empresas, revisando la ley de quiebras,
- (iv) la mejora de la gestión de las empresas públicas, y
- (v) la revisión de los regímenes promocionales de la inversión”.

Conclusiones

Los pasos dados, el énfasis puesto en la mención de prioridades, los discursos y los documentos emitidos por el nuevo gobierno, muestran que los pasos se dirigen a tratar de mantener un régimen por respeto a los contratos entre privados, a apuntar a un crecimiento de producción y de

empleo basado en inversiones privadas, simultáneo a la aplicación de programas de asistencia a las franjas de indigencia y extrema pobreza (lo que no se ha resuelto ni se resolverá en forma sencilla).

Pero también está claro que ese camino no le será fácil al gobierno de la izquierda, que tendrá oposición interna y de aliados políticos (como sindicatos de funcionarios públicos y gremiales de productores u otras asociaciones que la izquierda entusiasmó con apoyo a sus reclamos). Que no le será fácil a un presidente de izquierda que quiere (y tiene) que dar señales a su electorado histórico, a sus dirigentes que apuestan a viejas banderas.

Y que más allá de la definición de metas y de cómo llegar a ellas, la izquierda está haciendo un aprendizaje del ejercicio del gobierno (no es nada parecido a manejar el municipio de la capital), que tendrá más que un sobresalto e imprevistos.

Si blancos y colorados cuestionan, la izquierda se aglutinará para mostrarse unida. No hay posibilidades hoy de fractura política interna del gobierno como para buscar aliados en otras tiendas.

La apuesta del “polo moderado” es que el “eje radical” haga la experiencia del gobierno y comprenda que viejas banderas deben ser recogidas.

Todo eso no será fácil para sectores políticos que durante décadas apoyaron reclamos sectoriales pensando que todo se puede atender al mismo tiempo y que desde el Estado se puede garantizar la felicidad del pueblo.

Con una pesada deuda pública y un Estado sin caja chica, con la necesidad de contar con inversión privada para empujar la economía, no habría mucho margen para tirar por la borda la salida de la crisis y la reactivación económica. Pero luego de unos cuatro meses de gobierno, la administración Vázquez está logrando muy pobres resultados en su principal bandera de campaña: el plan de emergencia contra la pobreza. Y eso ha llevado que muchos beneficiarios que no están recibiendo el subsidio monetario mensual, por problemas burocráticos, comenzaran a realizar protestas públicas con quema de cubiertas para cerrar calles y llamar la atención de la prensa, y fundamentalmente de las autoridades.

La policía tiene órdenes de no reprimir y si bien los “piquetes” no alcanzan la magnitud ni el peligro que tienen en Buenos Aires, el movimiento de “piqueteros” improvisados está encendiendo una luz amarilla.

Todo es muy frágil. Y una cosa es hacia dónde se quiere ir, otra es cómo se llega, y otra es como se saltean los pozos, zancadillas y obstáculos que se van presentando. Todo eso, mientras se aprende a manejar el Estado. No es fácil.

Ganador de los premios internacionales



2005 Templeton Freedom Award Grant for Institute Excellence

2005 Francisco De Vitoria Prize for Ethics and Values



El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Buenos Aires, Argentina, se constituyó como Fundación el 26 de febrero de 2003 con el objetivo de promover el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y las libertades económicas en los países de la región. Para tal fin, CADAL realiza actividades de análisis, investigación, difusión y capacitación trabajando en las siguientes áreas: Política Latinoamericana, Derechos Humanos, Periodismo y Democracia, Economía y Estado de Derecho, Modernización de los Partidos Políticos, y Desarrollo y Comunicación Institucional.